

Políticas económicas de la Nueva Izquierda: ¿Populistas o conservadoras?

Diana Tussie * y *Pablo Heidrich* **

Resumen

Este artículo analiza las políticas económicas, incluidas las de comercio, adoptadas por gobiernos electos en reacción a dos décadas de hegemonía neoliberal en América latina. Estudiar estos caminos nos permite discutir el alcance del cambio de política y observar las contradicciones y limitaciones de los gobiernos pos-neoliberales. Analizamos de qué manera estas políticas se ocupan de las tensiones y limitaciones que dejó el neoliberalismo mientras que, al mismo tiempo, intentan cumplir con algunas aspiraciones provenientes de la izquierda. Más allá de las diferencias manifiestas entre dichos gobiernos, puede observarse la emergencia de una nueva disposición ideológica caracterizada por la emergencia de una creencia pragmática en la intervención estatal y la búsqueda de un nuevo contrato social anclado en políticas macroeconómicas prudentes.

Abstract

This article analyzes the economic policies, including commercial policies, adopted by elected governments in response to two decades of Neoliberal hegemony in Latin America. By studying these procedures we are enabled to discuss the scope of policy change and to observe the contradictions and limitations of the Post Neoliberal governments. We

* Directora del Área de Relaciones Internacionales de la FLACSO/Argentina.

** Investigador de FLACSO-PIEI.

analyze the way these policies deal with the tensions and limitations left by the Neoliberalism while, at the same time, they attempt to fulfill some of the aspirations coming from the Left. Beyond the manifested differences between the abovementioned governments, the emergence can be observed of a new ideological disposition, which is characterized by the rise of a pragmatic belief in the state intervention and the search for a new social contract anchored in prudent macroeconomic policies.

Introducción

LA marea izquierdista que pareció barrer el sur del Río Grande dio lugar a sustanciales debates acerca de si las políticas son correctas, cuán sostenibles son y cómo esta nueva marea se parece o se diferencia de la izquierda o el populismo de antaño.

Después de casi dos décadas de reformas tecnócratas, en un país tras otro, los gobiernos de tintes izquierdistas llegaron al poder. Parece ser la respuesta de una región que se enfrenta a dos conjuntos de desafíos estrechamente relacionados. Por una parte, una creciente movilización de masas, y, por el otro, la disconformidad de la opinión pública, pero no de la élite con las estrategias de reforma.

Para analizar las políticas económicas de los nuevos gobiernos izquierdistas y así comprender su naturaleza proponemos utilizar los desafíos de una creciente movilización de masas y las demandas sociales como telón de fondo de las tensas relaciones que generalmente minan las estrategias económicas. De esta forma, partimos de la base de que tales políticas requieren de un nuevo equilibrio para tratar al descontento y la equidad social como cuestiones integradas. Las políticas económicas y comerciales son centrales a la identidad de los gobiernos. Por ejemplo, Néstor Kirchner en Argentina viene del partido Peronista, la quintaesencia del populismo, cuya capacidad para controlar al electorado y a los sindicatos, por más de cincuenta años, le permitió virar del nacionalismo populista histórico de Perón a las políticas de ala derecha neoliberal del menemismo. Kirchner es generalmente considerado como un presidente izquierdista por sus políticas económicas (*The Economist*, 11/14/06). En contraste, Lula da Silva en Brasil y Michelle Bachelet en Chile, dos presidentes elegidos por listas de izquierda y centroizquierda, han sido acusados de sostener políticas económicas ortodoxas o neoliberales por críticos nacionales y extranjeros (Jaguaribe, 2006). Lula fundó el Partido dos Trabalhadores, la organización izquierdista más grande de Brasil. Bachelet, por su parte, es una figura histórica del Partido Socialista de Chile, miembro de la Concertación de aquel país. Sin embargo, en comparación con otros líderes, como el venezolano Hugo Chávez o Evo

Morales de Bolivia, las etiquetas, justas o injustas, de los tres presidentes mencionados empalidecen. Ambos introdujeron reformas importantes en sus economías y en sus discursos anuncian aún más cambios en un futuro no demasiado lejano.

De esta forma, nos enfrentamos a una doble paradoja. Líderes que no habían sido percibidos como izquierdistas en el pasado, hoy son vistos como tales y otros que supuestamente eran izquierdistas no parecieran serlo. Al mismo tiempo, y en aparente contraposición al rechazo mundial del socialismo como estrategia de desarrollo económico desde los años 90, otros proclaman ser los verdaderos izquierdistas. Más allá de la retórica, la discusión acerca de qué es ser un gobierno de izquierda está dada en gran parte por el contenido de las políticas económicas. Nuestro objetivo es revisar el debate contemporáneo para comprender sus diferencias tanto en el tiempo como entre los países, para dar cuenta del amplio abanico de las políticas económicas que se pusieron en práctica.

Un marco conceptual: ¿una ventana que mira a la izquierda o mirando a la izquierda por la ventana?

Históricamente, la izquierda se identificó con objetivos de justicia social, desarrollo económico, emancipación nacional e igualdad socioeconómica. En términos de políticas, la izquierda abogó por la redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos, reformas y transferencias de derechos de propiedad (como la reforma agraria), la extensión de servicios de bienestar, la protección y la expansión de los derechos de los trabajadores, una fuerte participación del Estado en el proceso de industrialización y hostilidad al capital extranjero (Panizza, 2005a). La izquierda tuvo, sin embargo, pocas oportunidades de llegar al poder en el pasado, los pocos ejemplos siendo Arbenz en Guatemala en los años 1950, Allende en Chile en los años 1970, los sandinistas en Nicaragua y (en parte) Alan García en Perú en la década de 1980. Todos intentaron implementar algunas o todas de estas políticas, pero fueron víctimas de sus propios errores o imprevisiones financieras y finalmente, la desestabilización política terminó en la disolución de sus gobiernos, con altos costos para esos mismos sectores a los que buscaban beneficiar. A pesar de todo, estos partidos (y en muchas ocasiones los mismos líderes) resurgieron de las cenizas, se transformaron y volvieron al poder. Sus objetivos últimos tal vez sean los mismos, pero las políticas para alcanzarlos no son las mismas. Los nuevos gobiernos de izquierda no sólo han tenido en cuenta la interacción en el tiempo del colapso del socialismo y los grandes cambios estructurales, sino que también hubo un importante proceso de aprendizaje.

El aprendizaje y la adaptación comenzaron a finales de los años 1990 debido a dos experiencias que dividieron las aguas. Una fue la implementación del conjunto de reformas de mercado bajo el Consenso de Washington con gobiernos neoliberales. La estructura económica fue profundamente transformada, sobre todo la relación entre estados y mercados, así como el capital y el trabajo, abriendo esos países al comercio internacional y a los flujos financieros. La segunda experiencia tiene que ver con las experiencias de izquierda (excepto en Chile y Costa Rica) al frente de municipios, estados o provincias como Río Grande do Sul en Brasil y grandes metrópolis como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Bogotá, Ciudad de México y San Pablo. La combinación de ambas experiencias implicó un ajuste de percepciones a la nueva realidad, en la que las políticas para lograr los objetivos de justicia social y desarrollo económico necesariamente debían ser adaptadas a esa nueva realidad (Panizza, 2005b). El ajuste estructural de la década de 1990 redujo drásticamente el control de la economía por parte del Estado, liberó los precios de bienes y servicios esenciales, y, fundamentalmente, abrió la economía a la competencia externa. Las experiencias de los partidos de izquierda en las provincias y municipios durante la década de reformas, proporcionaron lecciones de lo que debería ser una agenda eficaz de políticas sociales.

Así, el resultado no fue “el fin de la historia”, sino la traducción de las lecciones aprendidas a las nuevas condiciones económicas y un nuevo clima de opinión, compuesto, por un lado, de un consenso positivo nacido de las experiencias en los gobiernos locales en torno a la necesidad de aumentar la inversión pública en salud y educación, la necesidad de que el Estado vuelva a la coordinación de la provisión de infraestructura física y energética y otras medidas que asistan a la competitividad; y, por el otro lado, un consenso negativo derivado de la crítica al neoliberalismo, es decir, una moratoria a las privatizaciones, regulaciones de los monopolios privados y un alto a la posterior liberalización del comercio unilateral.

Las experiencias neoliberales de los '90, dieron lugar a sustanciales debates sobre política macroeconómica. Los déficit fiscales sin control, así como déficit corrientes y comerciales, son más que riesgosos y dicho riesgo no puede ser aplacado por reformas pro mercado. Incluso los gobiernos más neoliberales pueden perder apoyo si no equilibran las cuentas fiscales y monetarias. Esta es la lección aprendida de la Argentina de Menem, el Uruguay de Battle, el Brasil de Cardoso, el Chile de Frei, el México de Salinas y tantos otros casos. En todos estos ejemplos, las crisis financieras derivadas de la falta de atención al déficit o por contagio de las crisis de otros países con las mismas vulnerabilidades, tuvo consecuencias nefastas. Esta es precisamente la coyuntura en la que la izquierda llegó al poder en América

Latina. En menos de dos años, después de cada crisis financiera causada por el mal manejo macroeconómico de la derecha o de la centroizquierda, las elecciones presidenciales fueron ganadas por partidos o candidatos de izquierda. En un mundo de comercio y mercados de capitales integrados, monedas flotantes y mercados financieros volátiles, la posibilidad de una nueva crisis está en la mente de todos.

La alternativa fue construir un gobierno que pueda llevar a cabo una agenda de políticas sociales con un corazón de izquierda, pero que continúe siendo fiscalmente conservador, demostrándole al electorado que la izquierda puede ser socialmente más sensible y al mismo tiempo económicamente responsable. Ambos componentes, un corazón social y un bolsillo responsable, deberán compatibilizarse para caminar por la cuerda floja que significa estar en el poder.

La línea divisoria entre izquierda y populismo en la región es a veces borrosa, y aún más en una era de política mediatizada y globalizada. El populismo, hasta cierto punto más que la izquierda, en América latina, tiene una larga y amplia historia vinculada a liderazgos carismáticos (ver la discusión en Aboy Carles, 2003). Sin embargo, las condiciones de fondo que favorecen el nacimiento de opciones populistas no han sido eliminadas; al contrario, resurgen con relativa facilidad cuando las demandas sociales y económicas permanecen insatisfechas, los partidos políticos sufren del desprestigio recurrente y existen dudas generalizadas de que exista el principio de igual tratamiento ante la ley. La brecha entre lo que la democracia debería significar y lo que realmente significa sigue siendo muy amplia.

El estilo populista nunca es abandonado del todo en algunos gobiernos de izquierda debido a que urgencias como la redistribución de la riqueza (Bolivia y Venezuela) y el aceleramiento económico (Argentina) pasan a un primer plano por encima del status quo y los pactos institucionales. Aquella evaluación se basa en las experiencias recientes de crisis institucionales severas en estas democracias, con rebeliones en los tres países y una baja participación electoral en Venezuela y Argentina. Este análisis también implica que un desvío populista de la democracia «a fin de salvarla» es temporal, porque una vez que estos agravios o carencias son tratados y hay certeza de que seguirán siendo tratadas por alternativas políticas no populistas, los populistas pueden ser derrotados en elecciones. Es un camino resbaladizo ya que la competencia electoral es muy sensible a las consecuencias de las políticas económicas y, especialmente, a la falta de institucionalidad.

Para el análisis de las políticas económicas de las nuevas administraciones de izquierda en América Latina, definimos al populismo como un estilo de gobierno que considera a las políticas económicas como instru-

mentos con objetivos *políticos* específicos en mente y no necesariamente con un anclaje en la realidad económica. Para tal populismo de tipo ideal, estos objetivos políticos son, por orden de importancia: movilizar el apoyo del trabajo organizado y los grupos de clase media baja, obtener el apoyo político de empresas nacionales (en su mayoría pequeñas y medianas) y aislar políticamente a la oligarquía hacendada, a las empresas extranjeras y los grandes intereses comerciales. Las políticas económicas (y de comercio) correspondientes son, también por orden de importancia: déficit presupuestarios neo-keynesianos para estimular la demanda interna, aumentos de salario nominales y controles de precios para la redistribución de ingresos y controles del tipo de cambio y apreciación de la moneda para controlar la inflación y aumentar salarios y ganancias en sectores de bienes no comerciables (Dornbusch & Edwards, 1991). En términos comerciales, las políticas populistas suelen incluir incrementos en las tasas reales de protección a través de barreras no arancelarias, o directamente el aumento de aranceles a niveles consolidados, o la adopción de posturas duras en las negociaciones comerciales, el control de las fuentes de divisas, afectando el volumen y los flujos comerciales, sumado a declaraciones a favor o en contra de intereses estadounidenses, u otras fuentes de capital extranjero.

Nos concentramos ahora en dos ejercicios complementarios. Primero analizaremos la cara externa de estos gobiernos izquierdistas, a saber, sus políticas de comercio externo como un modo de observar los patrones de relación con la economía global. Tal lectura nos permite observar de un solo vistazo a los gobiernos como un conjunto, expresando tanto sus semejanzas como sus diferencias. Luego analizaremos sus políticas económicas para poder hacer una comparación entre ellos.

Las políticas comerciales: ¿el lado oscuro del corazón?

La política comercial tiene implicancias distributivas particulares para analizar la nueva conformación de los regímenes políticos. Con la sustitución de importaciones, la protección permitía aislar a la población de las fluctuaciones de los mercados internacionales. El empresariado y los sindicatos, ambos a favor de la protección, ocupación alta y consumo interno, lograron fijar una estructura de precios interna favorable. Pero cuando la protección comercial finalmente se desmanteló, como sucedió con las reformas de los años noventa, la estructura de precios internacional fue internalizada y las negociaciones internacionales que siguieron tuvieron un impacto manifiesto e inmediato sobre precios.

El aumento de la eficiencia productiva, sin embargo, se quedó corto en al menos tres dimensiones importantes: las exportaciones han crecido menos que las de otras regiones desarrolladas, sobre todo Asia del Este y Europa del Este; permanecieron (hasta el ascenso de China) muy sensibles al proteccionismo de Estados Unidos y la Unión Europea; y finalmente y la más importante de todas las dimensiones, el crecimiento de las exportaciones no pudo financiar el crecimiento aún más intenso de las importaciones, consecuencia de la apertura unilateral, haciendo que el endeudamiento sea un punto de apoyo fundamental a estas políticas. Este triple desafío demostró que la anterior política de abrirse unilateralmente y hacer “regionalismo abierto” con los vecinos era insuficiente para generar cuentas comerciales equilibradas. El sostenido déficit comercial entre 1998 y 2002 contribuyó fuertemente a la etiqueta de países vulnerables.

Por lo tanto, y con el fin de sostener los niveles de apertura comercial, los gobiernos se abocaron a la consecución de tratados comerciales preferenciales y recíprocos con socios más dinámicos. Los demandantes de la nueva política comercial eran sectores ligados a la exportación, que presionaban en la búsqueda de qué productos precisaban ser colocados y a qué mercados apuntar. En América Latina, esto puede significar a menudo las «oligarquías de exportación tradicionales» de antaño unido a la exportación de materias primas, y otras más nuevas vinculadas a la construcción y a las telecomunicaciones. Más allá de esta gravitación interna, hay una fuerte exigencia para que los gobiernos otorguen acceso en condiciones de reciprocidad en todas las negociaciones. Ello significa que el acceso a un mercado externo para una exportación dada requiere de «una concesión» en el mercado interno. Es decir que cada negociación implica costos internos al mismo tiempo que ganancias, e incrementa la sensibilidad al proceso de ajuste, un equilibrio que en un escenario democrático no puede dejarse de lado (Gilligan, 1997). Y esta conciencia de la espada de Damocles, entre ganancias externas y costos internos aumenta la resistencia de los gobiernos a ceder con ligereza.

Por otro lado, dado que la mayoría de los aranceles ya han sido reducidos drásticamente en la región, las negociaciones comerciales ya no son solamente sobre política comercial, sino también sobre el intercambio de concesiones, incluyendo temas relacionados como los derechos de los inversionistas, propiedad intelectual y compras estatales. Este es el caso particular del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de los tratados bilaterales negociados con Estados Unidos, pero también en los de MERCOSUR y la Unión Europea. Mientras los países latinoamericanos aún tengan la buena voluntad y la capacidad de utilizar aquellos instrumentos de política, son una importante moneda de cambio para acceder a los mercados que sus exportadores desean.

Por ello la política comercial adquirió una importancia sin precedentes en el escenario nacional. La aparición de coaliciones internacionales contra el ALCA y grupos de presión nacional condicionan el accionar de los gobiernos y requieren esfuerzos intensos para articular esos intereses. El entretejido de las posiciones de negociación se convirtió no sólo en una mera tarea técnica, sino además en una delicada tarea política en un juego que enfrenta a los ganadores orientados hacia la exportación contra los perdedores que compiten en el mercado interno.

Los actuales gobiernos de Brasil y Argentina en particular, han sido a menudo retratados como participantes reacios en las negociaciones comerciales, y sobre todo en el proyecto estadounidense de crear el ALCA. Hay varios motivos detrás de esta imagen. En primer lugar, ambos son economías importantes con densos mercados internos; son las economías menos abiertas de la región con aranceles medios aún altos (el 14.3 %) y cuyas exportaciones conforman menos del 20 % del PBI. El interés empresario en la iniciativa hemisférica fue tibio y, según encuestas, la opinión pública es refractaria. Un referéndum organizado en Brasil en 2002 por más de 60 organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la Confederación Nacional de Obispos Católicos reveló que más del 90 % de los votantes se oponía al ALCA y estaba a favor de directamente abandonar las negociaciones.

La canasta exportadora de Brasil también tiene su incidencia. Las principales exportaciones de Brasil a Estados Unidos cubren un amplio abanico, desde bienes de relativamente alta tecnología como aviones, partes de tractor, motores de explosión y equipos de telecomunicaciones; pasando por bienes de mano de obra intensiva de baja calificación como calzado y recursos naturales semiprocados como azúcar, jugo de naranja y hierro. La mayoría de ellos fueron a menudo blanco de la amplia gama de instrumentos proteccionistas estadounidenses (picos arancelarios, investigaciones antidumping y derechos de compensación, para nombrar algunos). El reclamo no necesariamente significa una postura anti-apertura, sino que es una demanda de acceso a mercados de escasa apertura y mayor valor agregado que podrían generar un crecimiento económico. En esencia, se trata de una reacción neo-desarrollista para equilibrar el ajuste comercial, aceptando la inevitabilidad del escenario global acompañándolo de la conciencia por los efectos distributivos, procurando administrar aspectos potencialmente destructivos con contrapropuestas continuas, a menudo expresadas en la Ronda de Doha de la OMC. Finalmente, el objetivo es construir pre-compromisos y consensos de manera de construir alianzas internas capaces de mantener el equilibrio, un intento de unir la cara externa del gobierno con la preocupación interna por el desarrollo y la justicia social.

La postura brasileña hacia Estados Unidos en las negociaciones fue crítica, pero nunca tan confrontativa como la venezolana. Esta diferencia no es trivial. Regatear y defenderse no es patear el tablero. El objetivo es conservar al mercado interno y al mismo tiempo abrir el acceso para las exportaciones. Tal dirección política es evidente en los esfuerzos de Brasil por construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), agrupando a países del Pacto Andino con los del MERCOSUR, mediante iniciativas de integración energética y desarrollo de infraestructura física (Giacalone, 2006; Heidrich, 2007). Aunque sea un desafío directo a Estados Unidos, en Brasil es visto como la simple proyección de los intereses de los exportadores nacionales a mercados regionales. La búsqueda de equilibrio tiene larga tradición en Brasil.

El hecho de que estas iniciativas fueron puestas en marcha por gobiernos de centro derecha en Brasil (Cardoso) y Argentina (De la Rúa) no impidió a las nuevas administraciones de izquierda seguir por ese camino, con apoyo de la opinión pública. Tal continuidad muestra la gravitación del sector exportador como motor de la política comercial. Esta tendencia general es el corazón de nuestro argumento. En todos los países, los intereses exportadores tienen hoy una relevancia creciente en el escenario nacional con fuertes lazos y alianzas internacionales. Pero en todos los casos, la incidencia de las negociaciones comerciales sobre la distribución de ingresos y en última instancia sobre la desigualdad, se convirtió en una cuestión de primer orden en las polarizadas campañas políticas.

Por otro lado, Chile, Perú y Uruguay sostienen fuertes intereses exportadores con capacidad de entrar al mercado estadounidense a pesar del proteccionismo de aquel país. La composición de la canasta exportadora está anclada en productos frescos y en pequeños volúmenes, a diferencia de las exportaciones agrícolas tradicionales a granel. En este sentido, Chile fue un precursor al firmar un acuerdo de libre cambio en 2003 con Estados Unidos. Perú negoció a partir de 2004 y el nuevo gobierno de Alan García, electo en 2005, logró la aprobación del Congreso. También Uruguay intentó negociar un acuerdo con Estados Unidos a partir 2003 y, una vez más, el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez continuó con aquella política, a pesar de la fuerte oposición de su partido. Como consecuencia de tal resistencia, Tabaré Vázquez recientemente reestructuró la iniciativa para dar a luz un acuerdo marco de comercio e inversión.

En resumen, el giro hacia la apertura de la economía no es rechazado de plano. Pero sus diferentes variantes, hacia una postura regional o bilateral en negociaciones comerciales, deben ser leídas en función a los intereses de exportación, y no tanto por el signo político de sus gobiernos. Lo que sí es profundamente político son los modos de tratar con los costos de transición

y el problema de acción colectiva derivada de las negociaciones comerciales. En sociedades muy desiguales con una frágil base fiscal, como las de América Latina, estos costos limitan la capacidad de los gobiernos para tratar con las presiones distributivas que provienen de la pérdida de ingresos repentina que sobreviene con la apertura.

En América Latina, frente a la apertura de sus economías, los nuevos gobiernos, atendiendo a las demandas sociales deben reparar los desequilibrios nocivos con una variedad de políticas de intervención, algunas transferencias sociales, alguna provisión de bienes sociales y regulaciones al libre juego de fuerzas de mercado. Los gobiernos hacen malabares con las dos fuerzas competidoras tipificadas por Karl Polanyi como ‘un doble movimiento’ en el cual dos principios de organización se interrelacionan. Cada principio pone objetivos institucionales específicos, tiene el apoyo de fuerzas sociales perceptibles y usa sus propios métodos distintivos:

‘Uno es el principio del liberalismo económico, que apunta al establecimiento de un mercado autorregulador, que confía en el apoyo de las clases comerciales y usa en gran parte el *laissez faire* y el libre cambio como método; el otro es el principio de protección social que apunta a la conservación del hombre y la naturaleza así como la organización productiva, confiando en el apoyo cambiante de aquellos inmediatamente afectados por la acción negativa del mercado...’ (Polanyi, 1944:132).

Este doble movimiento es el sello de la era post-reforma. En la siguiente sección veremos cómo los gobiernos administran los cambios de la política comercial en una era de altos precios de exportación y aumento de demandas sociales anteriores a la crisis que irrumpió en 2008.

Variantes: por color y tamaño

Esta sección compara las experiencias nacionales de gobiernos izquierdistas en América Latina, comenzando con aquellos percibidos como de izquierda, como el de Kirchner en Argentina, continuando con aquellos que se autodefinen como izquierdistas, como el Chile de Lagos y Bachelet, el Brasil de Lula y el Uruguay de Tabaré Vázquez, y termina con aquellos que se reivindican como los verdaderos izquierdistas, como Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia. En todos los casos, hay una clara diferencia entre la intención de mantener una agenda de izquierda con estandartes como la justicia social y la autodeterminación en el nivel micro, y las políticas macroeconómicas. El resultado es que aunque haya una mejoría de los

indicadores sociales, éstos también pueden ser conseguidos a través de políticas macro; y los resultados de estas últimas, podrían ser reforzados si tuvieran una política social con la cual acompañarlas. Estas reflexiones no son ajenas a un acercamiento liberal a la política, central al pensamiento occidental, como lo resume John Rawls (1973: 71) “El principio de eficacia no puede servir como única concepción de justicia”.

Con estas reflexiones como telón de fondo, ahora proponemos retratar las diferentes trayectorias de estos gobiernos y sus políticas económicas específicas. Comenzamos con Argentina, donde Néstor Kirchner asumió en 2003, con una economía que comenzaba a reponerse de la crisis más profunda de su historia y de los consiguientes niveles de pobreza y desempleo. Su administración macroeconómica se concentró en la acumulación de superávit fiscales, incluso después de pagos de deuda externa; en mantener un tipo de cambio subvaluado para reconstruir el tejido económico, permitir la recuperación y sostener superávit comercial. Estas políticas explican la espectacular mejora de la economía, que creció 8.5 % por año hasta 2006. Este crecimiento acumulado compensa por mucho las pérdidas acumuladas durante la recesión que marcó los últimos años de las administraciones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, en el fin de la Convertibilidad.

El logro del superávit fiscal incluyó una dura renegociación de la deuda externa, en cesación de pagos desde 2002. Kirchner logró que los bonistas tenedores del 76 % de una deuda de 100 mil millones de dólares aceptaran una reducción del 65 % en el valor de sus títulos, lo que redujo el peso de la deuda total de Argentina a menos del 60 % del PBI (EIU Informe de Argentina, 2006). Esto permitió que el gobierno ampliara su presupuesto para la inversión pública en infraestructura y subsidios para el transporte y la energía, al mismo tiempo que reanudó el pago de su deuda externa, mientras mantuvo el superávit fiscal. Es importante destacar que la generosidad fiscal de Kirchner no alcanzó a empleados del sector público ni al sistema de pensiones, donde los salarios reales están todavía por debajo de sus niveles del 2001. El empleo público aumentó menos del 5 % anualmente desde 2003, subrayando el interés por usar las inversiones públicas y no los empleos públicos para promover el nivel de actividad económica.

Las inversiones en infraestructura pública y los incrementos de la inversión privada en manufactura y servicios ocurrieron a la par, eventualmente reduciendo el desempleo del 20.4 % en 2003 al 8.5 % en 2007. La consiguiente reacción en términos de políticas públicas fue una dramática reducción en gastos de seguridad social, sobre todo del plan diseñado por la administración anterior de Eduardo Duhalde, de ingresos mínimos para desempleados, de 2.5 millones de beneficiarios a sólo 800.000. Además, los beneficiarios

están siendo trasladados a un plan diseñado por el Banco Mundial que proporciona ventajas sólo a aquellos que estén realizando un programa de re-entrenamiento o a aquellos que puedan comprobar que están buscando empleo activamente. Esta confianza en las ventajas de una recuperación liderada por el sector privado se confirma parcialmente en la reducción de la pobreza del 57 % en 2003 al 26 % actual, un nivel todavía considerado demasiado alto para estándares históricos en Argentina (EIU, 2006; CEPAL 2006b)

Luego del recalentamiento de la economía de los últimos años, el gobierno ha aplicado desde 2005 controles de precios a aquellos bienes medidos en el índice oficial de inflación. También aplicó retenciones a la exportación para aminorar la traslación de los precios de exportación a los precios internos, en particular, a la carne vacuna, el maíz y el trigo, que representan algo más del 10 % de las exportaciones totales. La estrechez fiscal detuvo las reducciones de impuestos, que habían aumentado con los últimos esfuerzos para apoyar la Convertibilidad en 2001 y manejar la secuela de su fin, en 2002. Los más visibles son los impuestos a las exportaciones de bienes primarios, como la soja y el petróleo.

Tal convencionalismo macroeconómico - cuentas fiscales fuertes, moneda competitiva y el énfasis en la infraestructura física sigue adelante sin la implantación de medidas neoliberales, como privatizaciones adicionales de bancos estatales o plantas nucleares, como exigía el Fondo Monetario Internacional desde 2002, y también, sin nacionalizaciones a gran escala, controles cambiarios, o masivos aumentos reales de salario (Ramírez Gallegos, 2006). De hecho, la retórica crítica hacia el rol del Fondo Monetario Internacional en la crisis de Argentina así como la complicidad de los bancos internacionales es el contraste más fuerte con el pasado.

Lula da Silva demuestra fuertes contrastes con Kirchner y esto se ve reflejado en la relación entre ambos presidentes. Desde que Lula da Silva tomó posesión del cargo en Brasil en 2003, su promoción de políticas sociales cambió radicalmente el papel del Estado: ahora aproximadamente 44 millones de personas, o el 25 % de la población, tiene ingresos mínimos mediante el programa Bolsa Familia (Hall, 2006). Su gobierno también hizo esfuerzos sistemáticos para dirigir las pequeñas sumas de inversión fiscales disponibles a nivel federal hacia la construcción de infraestructura de agua corriente y escuelas en las áreas más empobrecidas del nordeste del país. Estos esfuerzos lograron reducir la pobreza a escala nacional de más del 30 % a menos del 25 % en los últimos tres años, un logro notable cuando se considera que el desempleo aumentó del 8 % al 12 % en el mismo período, según cifras oficiales (CEPAL, 2006).

Estos esfuerzos por llevar a cabo una agenda de atención a lo social vinieron de la mano de políticas económicas que beneficiaron a los segmentos más ricos de la sociedad, sobre todo aquellos relacionados con el sector financiero. El gobierno mantuvo tasas de interés muy altas buscando reducir los niveles de inflación, que pasaron del 17 % cuando tomó posesión del cargo a 3 % hoy día. Sin embargo, el precio para lograrlo fue mantener tasas de interés exorbitantes en términos reales que dieron grandes ganancias al sector financiero, mientras la industria y la producción agrícola sufren costos cada vez más altos que los aleja aún más de la inversión productiva adicional (EIU Informes de Brasil, 2006; 2007). De hecho, la economía de Brasil, caracterizada desde siempre por su vitalidad, creció 2.3 % por año durante la presidencia de Lula da Silva. Es la segunda tasa más baja en toda América Latina, sólo por delante de Haití, sumergido en un conflicto civil. Mientras la economía apenas crece a razón del crecimiento demográfico y no puede generar suficientes empleos para sus nuevos trabajadores, los flujos financieros a corto plazo llegaron al país a una velocidad impresionante, lo que explica más del 50 % de la financiación de la deuda interna. Estos intereses fueron eximidos de impuestos en 2006, una ventaja que los inversionistas locales no reciben (Bloomberg, 14/11/06).

Para financiar esta deuda, que ahora es de más del 65 % del PBI (tanto interna como externa) el gobierno debió emitir cada vez más bonos sin ninguna salida fácil a la vista. La única salida estaría en la reducción de gastos fiscales más allá de los pagos de las deudas (salarios estatales y jubilaciones), pero Lula se comprometió a que tales cambios no ocurrirán durante su mandato (The Economist, 10/10/06). De hecho, durante su presidencia, el empleo estatal creció un 2 % anual, sobre todo en las empresas estatales, como Petrobras (que generó 17,000 nuevos empleos, es decir el 25 % del personal de la empresa) y el Banco do Brasil. Con una de las poblaciones más jóvenes en Sudamérica, Brasil ya tiene un importante déficit proveniente de pensiones y jubilaciones, equivalente al 2 % del PBI. De todos modos, Lula, luego de reducir las jubilaciones en 2003, las aumentó desde ese entonces a más del 17 %, compensando en mucho las tasas de inflación acumuladas desde 2003 (Bloomberg, 7/21/06).

En síntesis, el gobierno de Lula siguió una agenda de marcado tinte social para atender las más notorias desigualdades, sobre todo en términos de diseñar ayuda a los sectores más pobres de la población, generar empleos estatales y aumentar las jubilaciones. En política macroeconómica, su generosidad fiscal contribuyó, sin embargo, a generar una creciente deuda, cuyos pagos de intereses insumen más del 8 % del PBI o el 20 % de gastos fiscales totales. Para sostener dichos gastos, aumentó la participación del estado en la economía a más del 40 % del PBI, sin invertir demasiado en infraes-

estructura pública o en medidas a favor de la producción, como créditos más blandos (Valor, 10/26/06). Su política monetaria, con tasas de interés reales altas, atrajo a inversionistas extranjeros dispuestos a financiarlo a cambio de ganancias altas, rápidas, y a costa de una moneda sobrevaluada. Ello por su parte bajó el empleo, incentivó las importaciones y redujo la competitividad. Sólo los altos precios de exportación para bienes primarios, como la soja, el azúcar, el hierro y el café, redujeron el impacto de estas políticas sobre la sustentabilidad macroeconómica. (EIU Informe de Brasil, 2006).

Pareciera ser que el gobierno cree que repetir las decisiones de conducción irresponsables de los anteriores gobiernos centristas de los años noventa hoy podría ser perdonado en las urnas si se ofrecen compensaciones con políticas sociales a gran escala. Esta visión se confirmó en 2006 con su reelección, cuando el Nordeste votó por primera vez masivamente a favor de su partido, después de décadas de apoyar partidos clientelistas conservadores, mientras el sur industrializado y el centro exportador agrícola votó fuertemente en contra de él (Amaral, 2006). Sin embargo, fue el temor que suscitó Lula da Silva en torno a las supuestas tendencias privatizadoras de su opositor neoliberal lo que permitió que se afanzara en segunda vuelta. Este resultado permite comprender el valor que le dio el electorado a sus políticas económicas y sociales. Queda por ver si los mercados lo seguirán favoreciendo o si, como ocurrió con anteriores gobiernos de izquierda (y de centro), se le volverán en contra cuando decidan que no puede darse el lujo de seguir favoreciendo a los más pobres y los más ricos al mismo tiempo, y de manera tan radical.

Los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet ofrecen, en comparación, una lección más moderada de lo que es ser de izquierda. Lagos gobernó en un momento político más complicado, en el que el milagro chileno pareció definitivamente haber pasado en 1998, cuando la economía entró en recesión. Después de quince años con un crecimiento de 7 %, semejante al de Asia del Este, el PBI cayó el 3 % en 1998 y desde ese momento creció sólo el 3.2 % en promedio, muy por debajo de la tasa de los demás países en vías de desarrollo e igual que otros países de performance económica mediocre de América Latina, como Ecuador o El Salvador. La respuesta de Lagos a esa crisis fue reducir el control de capital para los flujos financieros, permitir la devaluación de la moneda y enfrentarse al modelo más monetarista del Banco Central, que insistía en aumentar las tasas de interés para contener la inflación (Weintraub, 2002). Prefirió la ruta de una inflación más alta buscando reducir el efecto de la recesión en el desempleo, en el sentido Keynesiano clásico. También abogó por el déficit fiscal para financiar inversiones públicas, un lujo que ningún otro país latinoamericano podía permitirse, gracias a la ínfima deuda pública de Chile.

Lagos no logró avanzar demasiado en una verdadera agenda de izquierda, como la modernización de las leyes laborales (dictadas durante la dictadura de Pinochet) y aumentos importantes en los presupuestos de educación y salud pública a causa de la debilidad de la Concertación. Sus compañeros de la alianza sistemáticamente vetaron aquellas iniciativas al igual que los partidos de oposición de derecha, que temían que un aumento de los derechos de los trabajadores y más gastos estatales pudieran sofocar la mágica mano del mercado (*The Economist*, 5/3/01). La fuerte reacción del sector privado en contra de aquellas medidas y las reprimendas de Lagos, afectaron claramente al clima de inversión en el país, contribuyendo a la lenta recuperación de la crisis de 1998-9, finalmente completada en 2003.

Los altos precios de las materias primas favorecieron a Chile más que a ningún otro país latinoamericano. El precio del cobre, que totalizó más del 60 % de las exportaciones totales en 2006, subió más del 310 % desde su punto más bajo en 2001. Bachelet asumió en un contexto de rápida mejoría y no siguió las líneas de su predecesor, concentrándose en cambio en medidas superficiales para mejorar la eficacia de gastos sociales. Rechazó firmemente cualquier aumento sustancial en gastos de educación pública y salud, lo que produjo las manifestaciones más grandes en la historia de Chile, cuando más de medio millón de estudiantes protestaron en contra de su política de educación. En cambio, siguió enfocada en el cuidado del nuevo superávit externo. A diferencia de Lagos, ella no resistió la apreciación monetaria, en perjuicio de los no exportadores de cobre (vino, fruta y textiles) ni las muy altas tasas de interés que favorecen a los sectores financieros por sobre los productivos (*The Financial Times*, 5/9/06). Al igual que en Brasil, la economía crece tímidamente, y mientras la pobreza en Chile es menor al estándar regional, 20 % aproximadamente, no hubo ninguna mejora desde 2001. Esto rompe con la tendencia de los anteriores gobiernos de Concertación, en los que la pobreza se redujo más del 40 % desde 1990 (CEPAL, 2006 b).

Por lo tanto, no fue casual que la oposición pasara a ser un fuerte desafío en las elecciones de 2004 con Sebastián Piñera, un millonario de tinte populista, que sostuvo una campaña muy creíble en torno a los fracasos de la Concertación de reducir la pobreza y, sobre todo, en torno al aumento de la desigualdad social (COHA, 2005). Piñera argumentaba que la lenta reducción de la pobreza y desigualdad eran causantes del pobre crecimiento económico del país en los años anteriores, una idea que hace eco en el corazón de los críticos más tradicionales de la izquierda.

Las políticas de Tabaré Vázquez en Uruguay, ilustran una interesante mezcla de rasgos ya vistos en las administraciones izquierdistas antes descritas.

Al igual que Lula da Silva y Bachelet, es cauteloso en darle la bienvenida a la inversión extranjera y promovió las ventajas de un cuidadoso manejo de las cuentas fiscales y comerciales. Esto se refleja en el retorno de fuertes flujos financieros, lo que apreció la moneda, al igual que en Brasil y Chile. Continuando con las medidas tomadas por el gobierno neoliberal anterior, Vázquez supervisó la recuperación de la economía y la reducción del desempleo. Combinado con importantes inversiones en asistencia social y subvenciones, contribuyó a reducir la pobreza del 22 % al 17 % (CEPAL, 2006b). Pero, al igual que Kirchner, los principales avances de su gobierno están en la provisión de infraestructura pública para acelerar el crecimiento económico, como fibra óptica para telecomunicaciones, mejoras a puertos marítimos y rutas para asistir al desarrollo de un nuevo sector que está en pleno crecimiento, las plantas de celulosa.

Como Lula da Silva y Bachelet, Vázquez debe cargar con el peso de haber sido elegido como candidato de un partido «izquierdista» y como consecuencia se espera que siga políticas izquierdistas. Por lo tanto, también comparte el destino de ser duramente criticado por sectores de su electorado y de su propio partido por adoptar políticas que hacen poco por reducir la desigualdad social y, como explicamos antes, se acercan demasiado a Estados Unidos (COHA, 2006). Irónicamente es Kirchner quien, elegido como un candidato del partido Peronista, típicamente populista, sorprendió a su país con políticas que fueron rápidamente calificadas como de izquierda, una etiqueta que él nunca asumió, sino que prefiere ser llamado «un pragmatista», al igual que sus colegas «oficiales» de la izquierda.

Estos matices son imposibles de aplicar a las bulliciosas administraciones de Hugo Chávez, el más antiguo de esta nueva izquierda, y Evo Morales, uno de los más nuevos participantes de este club. Ambos proclaman ser socialistas y prometen generar profundos cambios institucionales en la política y la economía de sus países, en la búsqueda de un cambio radical. Hablan de lograr importantes cambios en la distribución de la riqueza e ingresos, imponiendo estrictos límites a la influencia del capital extranjero y repiten su percepción de que Estados Unidos es un país amenazante. Los hechos, su política económica, proporcionan una ventana interesante para confirmar su proclama de ser «verdaderos» líderes de izquierda.

Chávez asumió la presidencia en 1999 en un contexto de profunda recesión inducida por los bajos precios del petróleo (12 dólares el barril en 1999, contra 70 en septiembre del 2007)³, y de insatisfacción popular con respecto al estamento político y económico que gobernó el país desde los años

³ Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo de Venezuela.

1950. Durante sus primeros años hizo reformas radicales: una nueva constitución, el poder judicial fue ocupado en su totalidad por sus partidarios e intentó organizar a los sindicatos cercanos de su partido, sin tocar la economía. De hecho, mantuvo las políticas de la administración anterior, gradualmente reduciendo aranceles, manteniendo al Bolívar convertible y tasas de interés reales muy altas para contener la inflación vía medidas ortodoxas. Siguió recibiendo inversiones extranjeras, en gran parte gracias a la industria petrolera y no ajustó la regulación en ningún sector económico importante (*Business Week*, 9/20/99). Sin embargo, su aproximación a la reducción de la pobreza fue desde el principio muy decisiva, con un aumento en gastos de educación y salud pública, estableciendo un sistema de subvenciones al transporte y más importante, un sistema de mercados de alimentos y farmacias estatales operados por los trabajadores, para abaratar el costo de bienes básicos para los sectores más pobres de la población. En contraste, redujo drásticamente la financiación pública de infraestructura física, como rutas, puertos y transporte de energía, proyectos históricamente privilegiados por los gobiernos venezolanos para lograr el apoyo de la élite, cercana al sector de contratación pública (Ellner & Hellinger, 2003).

Estas políticas socioeconómicas, más su retórica agresiva contra el establishment venezolano pronto atrajeron el apoyo abierto de Fidel Castro, que ofreció intercambiar doctores y profesores para los sectores más pobres en Venezuela por petróleo para Cuba. También despertaron una radicalización de la oposición. En 2002 los principales líderes comerciales del país dieron un golpe de estado. Luego de que fracasara, promovieron una huelga en PDVSA, la compañía petrolera estatal, contra el deseo de Chávez de controlarla. Aunque la huelga ni el golpe tuvieron éxito, el conflicto continuó y la respuesta de Chávez fue la radicalización de sus proyectos económicos (Fletcher, 2003).

Desde 2002, Chávez siguió una estrategia basada en tres pilares, claramente dentro de las líneas del populismo histórico latinoamericano: una iniciativa fue redefinir los contratos con compañías petroleras extranjeras; la segunda, fomentar el crecimiento de empresas cooperativas estatales industriales y agrícolas; y la tercera «mudar» a Venezuela de la CAN al MERCOSUR. Todas las medidas son acompañadas por una política de conservar la sobrevaluación de la moneda para maximizar el consumo (de bienes importados, irónicamente); controles monetarios para impedir la fuga de capitales y políticas monetarias y fiscales muy laxas para acelerar la recuperación económica luego de la depresión causada por la huelga y la tentativa de golpe del 2002. Este cóctel produjo una dramática recuperación en el PBI, que crece un 8 % anual desde 2004. Los altos precios del petróleo ayudaron a ampliar los presupuestos asignados a políticas

sociales y la financiación para el creciente sector cooperativo (The Economist, 30/07/2005).

Como suele suceder con los experimentos populistas, los resultados a corto plazo son muy impresionantes. El desempleo cayó del 25 % en 2003 al 11 % actual, la pobreza de más del 60 % en 2002 a menos del 35 % y hay un boom de construcción y consumo sin precedentes que lleva a la economía a un claro sobrecalentamiento, expresado en una tasa de inflación de más del 15 % en 2006 y en controles mucho más estrictos que los que Kirchner podría soñar con implementar en Argentina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2006b). El éxito aparente de esta política se evidencia en el hecho de que en las elecciones presidenciales de diciembre del 2005, Chávez debió enfrentarse a un aspirante con serias posibilidades de ganar, Manuel Rosales, un populista declarado, que prometió aumentar aún más los gastos sociales y convertir los crecientes fondos de educación pública y salud en vales en efectivo para ser entregados directamente a los sectores más pobres de la población, alimentando así aún más la bonanza del consumo. Este sería un final más bien «privatizado» pero igualmente populista a la supuestamente socialista Revolución Bolivariana de Chávez.

Un experimento populista más reciente pero similar es el de Evo Morales en Bolivia. Después de dos años en el poder, los cambios en la política económica han sido muy pocos, y varios de ellos tomaron una dirección bastante inesperada. Decretó la nacionalización de la industria del petróleo y del gas. Al mismo tiempo llamó a los inversionistas extranjeros de este sector a que acepten nuevos contratos que los convertirían en abastecedores de servicios para la explotación dejando de ser dueños de las reservas de hidrocarburos. Después de meses de duras negociaciones, Morales finalmente consiguió su objetivo y todas las empresas extranjeras acataron las nuevas reglas. Esto, más el incremento en los impuestos de la industria que él promovió desde la oposición en 2005, sacó finalmente al estado boliviano de una situación de déficit del 2.3 % del PBI en 2004 a un superávit del 5 % este año (CEPAL, 2006a).

La gran sorpresa es que tal aumento masivo de ingresos fiscales no fue acompañado por el correspondiente aumento de “gastos populistas”, como en Venezuela. En cambio, Morales demostró su preferencia por seguir el ejemplo de Bachelet, estableciendo una cuenta de estabilización en el extranjero con los fondos sobrantes (The Economist, 12/13/06). La segunda sorpresa es que el estado boliviano, después de décadas de depender de la ayuda externa de ONGs europeas y del gobierno estadounidense, ya no los necesita y estas agencias, al tiempo que vieron sus capacidades tornarse inadecuadas, perdieron su influencia en la administración estatal boliviana.

Por lo tanto, el gobierno de Morales perdió la posibilidad de canalizar aquellos fondos suplementarios hacia la política social porque su aparato aún no puede hacerlo. En este contexto, la política de Morales se volcó, no a la redistribución de ingresos, sino a la redistribución de riqueza siguiendo adelante con los planes para nacionalizar la minería y redistribuir las tierras agrícolas en las provincias del este. Queda por ver si su administración podrá llevar a cabo estos cambios así planeados en vez de implementar políticas para una mejora social gradual.

El siguiente cuadro resume los puntos expuestos más arriba, explicando detalladamente la amplia diversidad de políticas específicas aplicadas por los actuales gobiernos de izquierda. Este cuadro subraya la considerable mezcla pragmática y de ahí la dificultad para conceptualizar el fenómeno de la nueva izquierda en una dicotomía en cuanto a las políticas económicas y comerciales.

	Política Monetaria	Tipo de cambio (Valor de la Moneda)	Situación fiscal (déficit operativo)	Deuda	Gasto Social	Apoyo a TLC con EE.UU.	Apoyo a la integración regional
Lula	Restrictiva	Sobrevaloración	Déficit	Alta y creciendo	Alto	No	Si
Lagos	Laxa	Equilibrio	Déficit	Muy bajo	Alto	Si	No
Bachelet	Restrictiva	Sobrevaloración	Superávit	Nula	Bajo	Si	No
Tabaré Vázquez	Restrictiva	Sobrevaloración	Déficit	Alta, pero disminuyendo	Alto	Si*	No
Chávez	Laxa	Sobrevaloración	Superávit	Baja, y disminuyendo	Muy Alto	No	Si
Morales	Restrictiva	Sobrevaloración	Superávit	Alta pero disminuyendo	Muy Alto	Si	Si
Kirchner	Laxa	Devaluación	Superávit	Alta, pero disminuyendo	Bajo	No	Si

* Vázquez intercambió un TLC por un acuerdo marco de comercio e inversión (TIFA) con Estados Unidos.

Conclusiones

El cuadro presentado en este trabajo muestra la nueva disposición política que contrasta con la agenda de los años 1990, dejando atrás la confianza ciega en la capacidad de los mercados como cura de todos los males. Pero hay también fuertes diferencias con la vieja izquierda asociadas a la sustitución de importaciones, el capitalismo de Estado y políticas fiscales sobre-

expansionistas. El importante aprendizaje social demuestra hasta qué grado las inclinaciones específicas de izquierda se adaptaron pragmáticamente a las nuevas condiciones estructurales. Las políticas económicas demuestran la existencia de una conciencia conservadora en torno a los peligros de la volatilidad inherente en los mercados globales.

Se pueden realizar dos lecturas de esta progresión. Por un lado, han surgido administraciones de izquierda que aceptan pragmáticamente el orden de las fuerzas del mercado globalizado, dando la espalda a aquellos que tienen intenciones de poner un límite a esas fuerzas. En esta categoría se encuentran los gobiernos que favorecen una creciente apertura a los mercados globales y apoyan los tratados comerciales con Estados Unidos o las privatizaciones. En la categoría más intervencionista se encuentran los gobiernos que se resisten a dichas fuerzas con medidas que las limitan, como los controles de precios selectivos o renegociaciones de contratos con inversionistas extranjeros. En el reino de las políticas económicas esta dicotomía no proporciona un cuadro exacto. Tomando el ejemplo de Morales: mientras se inclina a la renegociación de contratos estatales con las firmas extranjeras, su administración no tiene una aversión a negociar un tratado comercial bilateral con Estados Unidos. Por otra parte, no cedió a las presiones para seguir los pasos de Chávez y retirarse de la Comunidad Andina ni destinar grandes fondos de ingresos fiscales a políticas sociales.

Un retrato más exacto requiere alejarse de la tentación de la sobre-dicotomización. Debe tenerse en cuenta la búsqueda de un nuevo equilibrio entre estados y mercados y, de esta forma, analizar las administraciones de izquierda a través de sus políticas económicas, incluyendo el conjunto de opciones políticas comerciales y sus restricciones y, sobre todo, el resultado de las políticas monetarias y fiscales, siendo estos los indicadores más genuinos y objetivos de inclinaciones y limitaciones estructurales, más relevantes hoy que los gustos o disgustos ideológicos. A la luz de los argumentos esbozados, esta experiencia no debería ser del todo sorprendente. Las políticas pragmáticas son aquellas que organizan principios económicos alrededor de coacciones y oportunidades. Así como varían las circunstancias nacionales, también varían las políticas que funcionan. Es verdad que la figura de Chávez, no exactamente pragmática, hoy tiene gravitación en América del Sur. Pero la Venezuela de Chávez (o en realidad la Venezuela rica en petróleo) no puede ser utilizada como punto de referencia para hacer generalizaciones.

Los ejemplos revisados aquí permiten comprender que la izquierda en el gobierno incorpora tal diversidad de políticas e inclinaciones que el concepto de la izquierda es en sí mismo una categoría, casi una caricatura, demasiado estrecha para explicar en forma concluyente. Las características

nacionales y el cronometraje de la recuperación de estos países de experimentos neoliberales en los años 1990 podrían proporcionar una explicación alternativa interesante. Por ejemplo, aquellos países más negativamente afectados, como Bolivia y Venezuela, que se mueven hacia experimentos radicalizados de tono populista, y otros menos afectados, como Argentina con expresiones menos radicales de políticas de izquierda (y populismo verbal), y los que fueron aún menos afectados, como Uruguay y Brasil, que siguen adelante con políticas económicas y comerciales similares a las de los años noventa con componentes de política sociales mucho más fuertes. Sólo Chile parece socialmente cauteloso con Bachelet, en su camino de dar lugar a un gobierno que sea tan socialmente sensible como macroeconómicamente sano. Con lo dicho, si debemos indicar la única coincidencia en esta diversidad, hay una que es muy significativa: la aparición de una creencia pragmática en el papel de la política pública. Tal creencia es un saludable desarrollo para la democracia ya que inyecta en la política una sensación de que la esperanza no es en vano para encarar las enormes demandas sociales.



Bibliografía

- . (1999) *Business Week*, 9/20/99.
- . (2001) *The Economist*, 05/03/2001.
- . (2005) “The Lagos Legacy and Chile’s Upcoming Elections”, COHA Press Release, 10/11/05, disponible en www.coha.org, Washington, DC.
- . (2005) *The Economist*, 30/07/2005
- . (2006) “Brazil Cuts 2006 Social Security Deficit Forecast”, 7/21/06, disponible en www.Bloomberg.com.
- . (2006) “Uruguay’s Tabaré Vazquez: Pink Tide or Political Voice of the Center?”, COHA Press Release, 3/04/05, disponible en www.coha.org, Washington, DC.
- . (2006) *The Economist*, 10/10/2006
- . (2006) *The Economist*, 13/12/2006
- . (2006) *The Economist*, 14/11/2006
- ABOY CARLÉS, G. (2003) “Repensando el populismo”, en *Política y Gestión*, Vol. 4, Buenos Aires.
- AMARAL, R. (2006) “Ministro quer Bolsa Família maior em 2o governo Lula”, Reuters, 10/23/06, disponible en www.reuters.com.
- CASTAÑEDA, J. (1993) “Utopia Unarmed: the Latin American Left After the Cold War”, Nueva York, Vintage Books.
- . (2006) “Latin America’s Left Turn”, en *Foreign Affairs*, agosto.
- CEPAL (2006a) Estudio económico de América Latina y el Caribe 2005-2006 (estadística), Santiago: Comisión Económica para América Latina.

- CEPAL (2006b) *Panorama social de América Latina y el Caribe*. Santiago: Comisión Económica para América Latina.
- CEPAL (2006c) *Panorama de la inserción internacional de América Latina*. Santiago: Comisión Económica para América Latina.
- DORNBUSCH, R. & EDWARDS, S. (1991) "The Macroeconomics of Populism", en *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, R. DORNBUSCH & S. EDWARDS (Eds.), Chicago, University of Chicago Press.
- EIU (2006 y 2007) "Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay and Venezuela Country Reports", en *Economist Intelligence Unit*, Londres.
- ELLNER, S. & HELLINGER, D. (Eds.) (2003) *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*. Boulder y Londres, Lynne Rienner Publishers.
- FLETCHER, S. (2003) "PDVSA workers oppose takeover of PDVSA by Chávez", en *The Oil and Gas Journal*, Vol. 101, n° 3, pp. 29-31.
- GIACALONE, R. (2006) "La Comunidad Sudamericana de Naciones: ¿una alianza entre izquierda y empresarios?", en *Revista Nueva Sociedad*, Vol. 202, pp. 74-87.
- GILLIGAN, M. (1997) *Empowering Exporters*. Ann Harbor: University of Michigan Press.
- HALL, A. (2006) "From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 38, 4, pp. 689-710.
- HEIDRICH, Pablo (2007), *Energía e infraestructura en América del Sur: Economía política de la integración*, Editorial Nuevo Sur.
- IMF (2006) *Balance of Payments Statistics CD-Rom*, Washington, DC: International Monetary Fund.
- JAGUARIBE, H. (2006) "Hasta ahora, Lula ha sido un Vargas retórico" (Entrevista con Helio Jaguaribe) Córdoba, Argentina, 3/31/06.
- KAUFMAN, R. & STALLINGS, B. (1991) "The Political Economy of Latin American Populism" en R. DORNBUSCH & S. EDWARDS (Eds.), *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.
- LACLAU, E. (2005) *Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism and Populism*. London, Verso Publishers.
- PANIZZA, F. (2005a) "The Social Democratization of the Latin American Left", en *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, Vol. 79, pp. 95-104.
- PANIZZA, F. (2005b) "Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-Centre Politics in Latin America", en *Political Studies*, Vol. 53, 716-734
- POLANYI, K. (1944) *The Great Transformation: The Political Origins of Our Time*. Nueva York, Beacon Press.
- R. M. DO PRADO, M. C. (2006), "A expansão dos gastos públicos", en *Valor Econômico*, 26/10/06, disponible en <http://www7.rio.rj.gov.br/cgm/comunicacao/clipping/ver/?9587>.
- RAMÍREZ GALLEGOS, F. (2006) "Mucho más que dos izquierdas", en *Revista Nueva Sociedad*, Vol. 205, pp. 30-45.
- RAWLS, J. (1973) *A Theory of Justice*. Oxford, Oxford University Press.
- SANTISO, J. (2006) *Latin America's Political Economy of the Possible: Beyond Good-Revolutionaries and Free-Marketters*. Cambridge, MS and London: Massachusetts Institute of Technology Press.

- VILAS, C. (2005) “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”, en *Revista Nueva Sociedad*, Vol. 197, pp. 84-100.
- WEINTRAUB, S. (2002) “Chile as a Template”, en *Issues in International Political Economy*, Vol. 35, Washington, DC: Center for Strategic International Studies.
- WEYLAND, K. (1999) “Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe”, en *Comparative Politics*, Vol. 31, n° 4, pp. 379-401.